

"En dicha oportunidad, se dejó constancia de la gravedad que podía acarrear tal situación, vislumbrándose un eventual peligro para la correcta administración de justicia...

"... Cabe destacar que ... se requirieron medidas concretas y urgentes tales como la suspensión de los términos en causas sin detenidos...

"La acuciante situación, reiteradamente planteada, no trajo aparejada decisiones que la aliviaran por parte de los órganos competentes, ni se advirtieron mejoras, cuando en marzo de 1994, comenzaron a funcionar los restantes tribunales ... que se agregarán a los ya existentes, hasta completar el número de catorce...

"Resulta innegable que el funcionamiento de los juzgados correccionales es altamente deficitario ... y ello ha promovido diferentes planteos de letrados disconformes con el desempeño de estos tribunales...

"Con sólo consultar las estadísticas confeccionadas al efecto, puede advertirse que la cantidad de expedientes que se inician en los turnos es realmente alarmante y el número de causas en trámite supera cualquier esfuerzo que puedan realizar y así lo hacen los empleados, funcionarios y magistrados, en contraste significativo con la de los expedientes que logran sustanciarse a través del juicio oral, dado que cada juez debe repartirse en múltiples actividades instructorias que le impiden organizar debida y continuamente las audiencias de debate previstas en la ley adjetiva vigente..."

Finaliza el tribunal reconociendo el estado de emergencia de la justicia correccional, cabiendo acotar por nuestra parte, que en el año transcurrido desde entonces tal situación se agravó notoriamente.

Existe entonces una efectiva denegación y un excesivo retardo de justicia pese al esfuerzo sobrehumano de magistrados, funcionarios y empleados del fuero, situación a la que debe ponerse fin de inmediato.

Como no se trata de restarle tareas a un fuero para endosárselas caprichosamente a otro, el de instrucción en el caso, la reforma que se propone se ha efectuado estudiando cuidadosamente no solamente la capacidad físico-humana, sino también la especialidad de los mismos, pudiendo afirmarse que la larga experiencia que han acumulado los jueces correccionales en materia de lesiones y homicidios culposos justifica que sigan entendiendo en los mismos.

Si bien en la actualidad tienen competencia exclusiva en tales delitos, la posibilidad de que tal situación varíe en un futuro cercano no puede ser ignorada, mereciendo tal afirmación la consecuente explicación.

En breve lapso han ingresado a consideración de esta Honorable Cámara sendos proyectos de reformas al Código Penal que proponen elevar las penas de los homicidios y lesiones culposos, artículos 84 y 94, respectivamente.

Cualquiera sea la fórmula que en definitiva se adopte, no parece irrazonable afirmar que las penas serán elevadas, lo que llevaría implícito la pérdida de jurisdicción de los jueces correccionales que, como ya expresamos, son los que cuentan con mayor especialidad en estos casos, los que pasarían a conocimiento de la Justicia de Instrucción cuya experiencia sobre el particular es menor.

De tal forma, proponemos mantener específicamente dentro del ámbito correccional el juzgamiento de las hipótesis contempladas en los artículos 84 y 94 del Código Penal a través de la reforma del inciso primero del artículo 27 del ritual, y en el supuesto de que tal elevación de las sanciones no sea receptada, la presente reforma sólo reafirmaría una situación ya existente.

La situación inversa es la que ocurre con la hipótesis del artículo 162 del Código Penal, ya que son los jueces de instrucción los que han acumulado mayor experiencia en este tipo de delitos, pero no resulta ésta la única explicación que nos ha motivado la reforma del inciso segundo del ya citado artículo 27.

Hemos tomado en cuenta además el carácter doloso del tipo; que el número de jueces de instrucción supera notoriamente el de los correccionales, por lo que poseen mayor infraestructura material y humana; que están de turno durante lapsos más breves lo equivale a una distribución de causas más equitativa; que el fuero tiene asignado mayor cantidad de fiscales y defensores oficiales; y en especial, que la tarea es compartida, en la etapa pertinente, con los tribunales orales en lo criminal, mientras que con el sistema actual, el juez correccional soporta la totalidad del proceso. Consideramos, de acuerdo a lo expuesto, conveniente la reforma que proponemos, a fin de que la justicia correccional pueda agilizarse y brindar adecuada respuesta en la persecución y sanción que aquellos que por imprudencia, impericia o negligencia cercenan vidas o incapacitan personas, ya que de nada vale agravar las sanciones, como está propuesto, si los que deben aplicárselas se encuentran imposibilitados de cumplir sus tareas porque éstas los superan.

Permitásenos, como reflexión final, manifestar que al elaborar el presente proyecto, valoramos además la incidencia que la mora en el trámite correccional, produce idéntico efecto en aquellos reclamos que ante el fuero civil efectúan las víctimas o sus deudos, ya que el magistrado que atiende los mismos se encuentra ante la prohibición legal de expedirse hasta tanto no concluya la causa penal, lo que nos permite afirmar que el retardo se produce simultáneamente en dos fueros de distinta naturaleza.

Con el objeto de poner términos a esta situación solicitamos la aprobación del presente por parte de esta Honorable Cámara.

Luis Rubeo.

—A la Comisión de Legislación Penal.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 119 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir.
3. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 120 del Código Penal por el siguiente:

Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de catorce años y menor de dieciséis y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 122 del Código Penal por el siguiente:

La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando es los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, conviviente, ministro de culto, tutor, guardador, o encargado de la educación o del cuidado de aquella o con el concurso de dos o más personas.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 123 del Código Penal por el siguiente:

Se impondrá reclusión o prisión de ocho a diez años cuando, en el caso del artículo 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 125 del Código Penal por el siguiente:

El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

1. Con reclusión o prisión de ocho a quince años, si la víctima fuere menor de catorce años.
2. Con reclusión de tres a seis años, si la víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho.
3. Con prisión de tres a seis años, si la víctima fuere mayor de dieciocho y menor de veintuno.

Cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere alguna de las personas enumeradas en el artículo 122 o hiciera con ella vida marital, o si fuese discapacitada mental.

Si cualquiera de estas conductas fuese desarrollada con el concurso de dos o más personas, o simulando empresa comercial u ofreciendo la actividad reprimida en el presente artículo como servicio de una empresa real, las penas previstas serán aumentadas en un tercio.

A quienes utilicen la explotación sexual de los menores como terceros contratantes o por cualquier otro título, para satisfacer deseos propios, se impondrá prisión de cuatro a ocho años.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal por el siguiente:

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal. Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122 o si la víctima fuere menor de catorce años se le aplicará de cuatro a diez años de reclusión o prisión.

Art. 7º — Sustitúyese el artículo 127 bis del Código Penal por el siguiente:

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de un menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años.

Si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 125 el mínimo de la pena será elevado a diez años.

Art. 8º — Incorpórase como artículo 128 bis del Código Penal, el siguiente:

Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años y multa de \$ 10.000 a \$ 150.000, el que publicare, fabricare, financiare, reproducire o importare libros, escritos, películas, videos, imágenes u objetos obscenos o pornográficos y el que los expusiere, editare, imprimiere, filmare, distribuyere, hiciere circular o de cualquier forma comercialice, utilizando para ello o exhibiendo a menores de dieciocho años, siempre que no se incurra en delito más severamente penado.

La pena será de seis a diez años de prisión y multa de \$ 50.000 a \$ 300.000, siempre que no se incurra en delito más severamente penado, al que hiciere de ello su actividad habitual.

Art. 9º — Sustitúyase el artículo 129 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con multa de \$ 750 a \$ 12.500, el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro exhibiciones obscenas.

La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieran lugar en sitio privado, pero expuesto a que sean vistos involuntariamente por terceros.

La pena será de uno a cuatro años de prisión si las exhibiciones están dirigidas a menores de dieciocho años.

Sufrirá prisión de cuatro a ocho años el que hiciere ejecutar a un menor de dieciocho años exhibiciones obscenas, tanto en lugar público o privado.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 131 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de dieciséis años y mayor de catorce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, si el rapto fuere de una menor de catorce años, con o sin su consentimiento.

Art. 11. — Agrégase al artículo 209 del Código Penal el siguiente párrafo:

El que instigare a un menor de edad a cometer delitos, públicamente o en privado, será reprimido, por la sola instigación con prisión de cuatro a ocho años.

La pena se elevará un tercio el mínimo y la mitad el máximo, si el instigador fuese alguna de las personas mencionadas en el artículo 122.

Art. 12. — Incorpórase como artículo 48 bis del Código Penal, el siguiente:

El que permita, autorice o consienta que un menor de edad participe en cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores, sufrirá prisión de cuatro a ocho años, siempre que el delito cometido no estuviere más severamente penado.

La pena se elevará un tercio el mínimo y la mitad el máximo, si el autor fuese alguna de las personas enumeradas en el artículo 122.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Rubio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

"Cada día que pasa, un número creciente de niños de todo el mundo son objeto de explotación y abusos sexuales. Es preciso poner fin a este fenómeno mediante una acción concertada a todos los niveles, local, nacional e internacional." (Punto 2, Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, agosto de 1996.)

La Nación posee una larga tradición en materia legislativa destinada a la protección de los niños contra los abusos sexuales y la prostitución, tanto a nivel nacional como internacional.

Ha participado en numerosos foros internacionales y ha suscrito tratados, declaraciones y programas destinados a la protección de la niñez en todas sus formas.

La muestra más relevante de la importancia que el país le brinda al tema se evidencia con la incorporación a nuestra Constitución de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Diversos organismos mundiales vienen denunciando el incremento de tan aberrantes conductas, traducido en la existencia de organizaciones que han hecho de la explotación sexual de los niños una actividad comercial habitual, que llega al colmo de ser ofrecida como servicios turísticos.

También los medios de comunicación locales y extranjeros nos informan, cada vez con más frecuencia, sobre estas desdenables conductas, habiéndonos llenado de espanto los sucesos descubiertos en Bélgica.

A nivel nacional el Consejo del Menor y la Familia viene alertando sobre el problema, habiéndolo puesto de resalto recientemente en las Jornadas Contra la Explotación Sexual de los Niños, celebradas el 26 de junio del año en curso.

En el Seminario Contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes de las Américas (Brasil, 16 al 20 de abril de 1996), y en el Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños (Estocolmo, 27 al 31 de agosto de 1996), el consejo —encabezando la delegación argentina— reafirmó la tradicional posición del país en la protección de los niños contra este flagelo.

En dicho congreso, la Nación votó por la aprobación de una declaración de trece puntos y un programa de acción destinado a combatir a aquellos que hacen de la explotación sexual infantil un vil comercio.

Por ello nos hemos comprometido a examinar y revisar nuestra legislación para adecuarla a la ardua tarea que debe emprenderse (punto 12 de la declaración y 31 y 4b del programa).

En cumplimiento de tales compromisos internacionales, como parte de las medidas que deben adoptarse para enfrentar el problema, elevamos a vuestra consideración el presente proyecto.

En efecto, se trata de un problema complejo, que debe ser atacado en distintos frentes, que requiere esfuerzos de todos: a nivel legislativo, de cooperación policial, de comunicación entre organismos nacionales, internacionales, estatales o de Organizaciones No Gubernamentales.

Así quedó establecido en el programa de acción, para cuya elaboración fueron tenidas en cuenta recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, del relator especial sobre venta de niños, la Interpol, la Organización Mundial del Turismo y el Consejo de Europa, entre otros organismos.

Estimamos que un primer paso en la dirección correcta, es brindar mayor protección a los niños en el Código Penal contra los abusos sexuales, sin perjuicio del resto de las medidas que, a la brevedad posible, necesariamente deben implementarse.

Como los victimarios resultan ser, por lo general, los adultos, el proyecto contempla la protección de los niños desde tres perspectivas: la ampliación de la edad de tutela de los menores, el aumento del monto de las penas, o ambas hipótesis según los casos.

También ha sido necesario tipificar algunas conductas para adecuarlas al objetivo del presente proyecto.

No somos ajenos a la existencia de discusiones doctrinarias sobre la conveniencia de las soluciones que se proponen, pero mientras el debate académico continúa miles de niños sufren los abusos y explotaciones sexuales de los adultos.

Como en este tipo de controversias jurídicas la razón de los argumentos se reparte por mitades, estimamos que las reformas impulsadas, agravando las sanciones y aumentando las edades de protección, contribución sin duda a mejorar la triste realidad que hoy impera.

Así se propone la reforma del inciso 1º del artículo 119, tipificando el delito de violación cuando la víctima tiene catorce años, edad que nos resulta más adecuada para tutelar la libertad sexual.

No creo equivocarme al afirmar que un niño de doce años, límite de edad en vigencia actualmente, tenga capacidad suficiente para discernir respecto de la sexualidad, situación que varía dos años más tarde.

Con la misma línea argumental, en el artículo 120 son elevados los toques de edad de doce a catorce y de quince a dieciséis años.

Estimo prudente incorporar al artículo 122 conclusiones jurisprudenciales incluyendo a las ya existentes, las figuras del "conviviente", "ministro de culto", "tutor", "guardador" y al "encargado del cuidado", ampliándose así la protección de los menores de la influencia que éstos ejercen, o del temor reverencial que les inspira y que utilizan para doblegar la resistencia de los niños en este tipo de delitos.

En el estupro agravado, tipificado en el artículo 123, resulta razonable equiparar el mínimo de esta figura con la del artículo anterior, manteniendo en cambio la diferencia en los máximos previstos.

"Los delincuentes y las redes delictivas intervienen en la búsqueda y canalización de los niños vulnerables hacia la explotación sexual comercial y la perpetuación de dicha explotación. Estos elementos criminales satisfacen la demanda del mercado del sexo creada por los clientes, especialmente hombres, que buscan la gratificación sexual ilegal con los niños. La corrupción y colusión, la ausencia de y/o legislación inadecuada, la laxitud en el cumplimiento de la ley y la limitada sensibilidad del personal encargado de la aplicación de la ley en relación con los efectos nocivos sobre los niños, constituyen un grupo de factores adicionales que conducen, directa o indirectamente, a la explotación sexual comercial de los niños. Esta puede implicar acciones de personas individuales o la organización en pequeña escala (familia y conocidos) o en gran escala (redes criminales)".

"La explotación sexual de los niños es practicada por una amplia gama de individuos y grupos a todos los niveles de la sociedad. Entre éstos se encuentran intermediarios, familiares, el sector de negocios, proveedores de servicios, clientes, líderes comunitarios y funcionarios del gobierno, todos los cuales pueden contribuir a la explotación mediante la indiferencia, la ignorancia de las consecuencias nocivas sufridas por los niños o la perpetuación de actitudes y valores que consideran a los niños como mercancías económicas." (Puntos 7 y 8 de la Declaración del Congreso Mundial de Estocolmo.)

En tal sentido hemos aumentado las penas y las edades de protección en los tres incisos del artículo 125.

Asimismo se incluyen en la figura agravada las personas enumeradas en el artículo 122 y la protección al menor discapacitado mental, con aumento de las penas en estos casos como adecuada sanción a estas aberrantes conductas.

Es agregado un tercer párrafo en el cual se dispone el aumento de las penas si intervienen en la explotación del menor dos o más personas o simulación de empresa o es ofrecida la actividad como servicio de una empresa real, estando destinada no solamente a combatir una organización de tipo local sino que puede llegar a alcanzar las internacionales creadas con fines de explotar el turismo sexual organizado.

Recogemos así la Declaración de la Organización Mundial del Turismo de 1995, sobre la Prevención del Turismo Sexual Organizado, y la recomendación R91 del Consejo de Europa relativa a la Explotación Sexual, Pornografía, Prostitución y Tráfico de Niños y Jóvenes Adultos.

Se propone sancionar en el último párrafo a los "clientes" ya que, sin lugar a dudas, participan activamente en los hechos que se persiguen, fomentando ciertamente las conductas de los agentes.

En la forma agravada del abuso deshonesto se amplía la protección a los menores de catorce años, que no estaba incluida, aumentándose el mínimo de la pena en estos casos.

A la figura que reprime la trata de mujeres y menores, el artículo 127 bis, le han sido aumentadas las penas, así como también a la forma agravada de la figura cuando concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 125.

Se crea el artículo 128 bis, que sanciona severamente con penas de prisión y multa a los que se dedican a lucrar con la pornografía infantil, castigando todos los aspectos posibles de este vil comercio, incluyéndose a los importadores de tales productos, habiéndose agravado las sanciones en caso de actividad habitual.

Se introduce la pena de prisión en el delito de exhibiciones obscenas cuando las víctimas son menores, situación que se agrava en el supuesto de que éstos fuesen inducidos a ejecutarlas.

En los supuestos del rapto impropio son elevadas las edades de protección, así como también las sanciones, continuando las pautas fijadas en el presente proyecto.

Se crea el artículo 48 bis que sanciona a aquellos que permiten la participación de menores de edad, en cualquiera de sus formas, en la comisión de delitos, aumentando la sanción en caso de que el autorizante fuese una de las personas enumeradas en el artículo 122.

Igual política se ha seguido contra aquellos que instigan a los menores a cometer delitos, buscándose de tal manera brindar una amplia protección a la niñez dentro del marco del Código Penal.

Estimamos respectivamente, señor presidente, que la rápida respuesta legislativa que estamos proponiendo

a combatir la explotación sexual de los niños, fido una política criminal severa, demostrar a la fuerte terminación de la Nación en el combate universal a tal flagelo.

Luis Rubeo.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

7

PROYECTO DE LEY

Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º—Institúyese el otorgamiento de becas a estudiantes en ejercicio de todos los niveles, para la realización de cursos de perfeccionamiento intensivo o patías en el exterior.

Art. 2º—El programa deberá destinarse a profesores de la educación en los niveles preescolar, primario medio, o de acuerdo a la Ley Federal de Educación, los niveles Inicial, Educación General Básica (en 3 ciclos) y Polimodal, así como también enseñanza ecial y de adultos, que se desempeñen en escuelas cadas en zonas de escasos recursos, rurales, urbano-ginales, poblacionales bilingües e indígenas.

Art. 3º—Las becas se adjudicarán por concurso de ecidentes personales y curriculares, y verificación congruencia entre las funciones del postulante y la antia peticionada. Los criterios de selección evián también el eventual impacto del perfecciona-nto propuesto, las características de la población y centro escolar, la prioridad asignada por las auto-ridades regionales y la cantidad y tipo de perfeccio-niento realizados por el candidato en los últimos años.

Art. 4º—Serán considerados requisitos esenciales:

- a) Ser argentino, o extranjero con más de cinco años de residencia;
- b) Poseer una antigüedad mínima de un año de ejercicio en su establecimiento escolar;
- c) No estar sometido a sumario administrativo, ni procesado, ni haber sido condenado por delito alguno.

Art. 5º—El monto de la beca deberá incluir el costo los pasajes de ida y vuelta, estadía, matrículas y/o echos requeridos por las instituciones respectivas, lis, materiales de estudio, seguro de salud y una nación para gastos personales.

Art. 6º—Fíjase en cinco millones de pesos 5.000.000), la partida anual destinada a la eje-ión de la presente ley, que deberá incluirse en el upuesto general de la administración nacional, a par-del año 1997 en adelante.

Art. 7º—Será autoridad de aplicación el Ministerio Cultura y Educación de la Nación.

Art. 8º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Rubeo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La reforma educativa que estamos implementando en nuestro país, y que implica un profundo cambio para todos los integrantes de la comunidad, deposita el mayor peso y la más alta responsabilidad en los docentes que deberán ejecutarla.

La oportunidad entonces, no sólo es propicia, sino más aún, es imprescindible que nuestros maestros y profesores de todo el país puedan acceder a capacitarse adecuadamente para llevar a cabo las finalidades propuestas al encarar las modificaciones perseguidas.

Sus características requieren que incorporemos la experiencia, los conocimientos y entrenamientos que los centros de prestigio internacional puedan aportarnos, máxime teniendo en cuenta la novedad que en nuestro medio significan las nuevas estructuras educativas.

El proyecto está dirigido a los docentes de los niveles preescolar, primario y medio, o de acuerdo a la Ley Federal de Educación, Inicial, Educación General Básica (en los 3 ciclos) y Polimodal, así como también enseñanza especial y de adultos, con la condición de que estén ejerciendo al momento de su postulación y que lo hagan en escuelas ubicadas en zonas de escasos recursos, rurales, urbano-marginales, poblacionales bilingües e indígenas y a que, por supuesto, el contenido de la pasantía peticionada guarde la debida relación con la función que están cumpliendo.

Esto garantiza que los conocimientos adquiridos se vuelquen de inmediato en la actividad del aula, con el consiguiente beneficio para los alumnos, asegurando el éxito del plan.

Tanto los requisitos indispensables establecidos, como los criterios generales de admisión taxativamente fijados, tienen como finalidad que las becas lleguen a quienes realmente carecen de los medios para su perfeccionamiento, reuniendo las condiciones morales, profesionales y curriculares necesarias.

Asimismo, es de destacar la exitosa aplicación de un programa similar en la hermana República de Chile.

La inminente llegada del tercer milenio nos exige una veloz adecuación a los requerimientos de un mundo competitivo, que excluye y margina a los que con la misma rapidez no se capacitan para ello.

Es deber ineludible del Estado proveer esa educación que, a no dudarlo, redundará en beneficio para el conjunto social; por lo que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Luis Rubeo.

—A las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

8

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su satisfacción y complacencia por la realización y resultados de la reciente visita de Su Santidad el papa

Juan Pablo II a la República de Cuba, brindando un ejemplo de diálogo y comprensión entre la mayor autoidad espiritual del mundo y su líder político, los que sin renunciar a principios o diferencias ideológicas han sabido expresar los deseos y voluntad de alcanzar una nueva dimensión en sus relaciones y en la vida de esa sociedad, alentando esperanzas de apertura y de mayor libertad.

Rafael A. Bulacio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La historia está encadenada por los acontecimientos clave que por su trascendencia significan cambios en la vida social, política, económica y cultural de los pueblos. Estos acontecimientos, por su repercusión y alcance, tienen efectos que van más allá de los protagonistas y de los que, como simples espectadores, quedan involucrados en los mismos. En este orden de valores, sin duda, está incrita la visita de Su Santidad el papa Juan Pablo II a Cuba, cuestión que no escapa a la atención del mundo, en tanto que su finalidad y efectos deben llamarnos a la reflexión.

El encuentro del Sumo Pontífice con el líder cubano aparecía como irreal e imposible sólo hace algunos años, ya que cada uno de ellos representa valores y concepciones del hombre y del mundo virtualmente opuestos. Sin embargo, se impuso la necesidad de la búsqueda del diálogo, como medio humano superior que permite, sin olvidar las diferencias, intentar la búsqueda de coincidencias y de un camino hacia un futuro mejor.

En el mundo actual, en el que la lucha y la competencia están alcanzando valores crecientes, en el que la globalización hace que cada vez más los problemas de uno aparezcan como cuestiones de otros, el saber que en el futuro pueden existir temas o aspectos en los que se puede identificar un mañana común es algo de tremendo impacto.

Durante varios días, la magia de la televisión nos ha hecho seguir como participantes privilegiados las palabras, los gestos, los actos y los movimientos del papa Juan Pablo II y de Fidel Castro. Diríamos que los ojos de la comunidad universal querían adivinar en cada uno de ellos no sólo sus expresiones sino entrar en lo recóndito de sus pensamientos y en lo profundo de los mensajes que cada uno enviaba, en forma no siempre directa, para que en ellos y detrás de ellos, aparecieran las soluciones. Pero es el largo y difícil camino de buscar casi imposibles, pero cierto y valioso de mostrar las mejores intenciones para hacerlo.

Los gobernantes de la tierra, los líderes de opinión, los seres comunes, han presenciado una magnífica escena que ha dejado enseñanzas, experiencias y antecedentes que aquellos que tienen responsabilidades hacia la comunidad deberán saber aprovechar. Probablemente, la mejor enseñanza es que el diálogo es posible aun en las disidencias, y que sólo a través del mismo, conteniendo, claro está, la dosis adecuada de honestidad, la solución de muchos de los graves problemas actuales está a nuestro alcance.

El pueblo argentino, que sufrió duros enfrentamientos en el pasado reciente, puede mostrar con orgullo, que hoy, pese a las naturales posiciones que la política impone, sus dirigentes están señalando un mismo espíritu y un común objetivo: contribuir lealmente al bien común. Lo que hemos podido observar en este tiempo de encuentros acaecido en Cuba, nos está dando la razón y demostrando que el camino emprendido debe ser continuado, profundizado y completado. Ello es lo que debemos asumir como propio y destacarlo ante los ojos de nuestros conciudadanos, en la enorme responsabilidad que nos han delegado al elegimos sus representantes.

No obsta a esta reflexión, el hecho de que el Papa sea el 264º ocupante del trono de San Pedro, en los 2.000 años de existencia de la Iglesia y sus mil millones de fieles, frente a los once millones de esa nación caribañera regidos por una revolución que ha cumplido 39 años y una ideología que se bate en retirada en el mundo. Tampoco que mientras la Iglesia sobreviva sin ninguna duda a la muerte del actual Papa con toda su fuerza, creencias e instituciones, nadie puede asegurar que sucederá en Cuba tras la desaparición del presidente Castro.

Sirva el episodio de Cuba como ejemplo alentador ante el mundo y ejemplo inteligente para aprobar nuestras propias conductas y acciones, señalándolo en forma expresa a través de esta declaración.

Rafael A. Bulacio.

—A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

9

Buenos Aires, 10 de marzo de 1998.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a fin de solicitarle se sirva disponer la reproducción del proyecto de ley 6.753-D-96, de la diputada Casari de Alarcía, Leonor (m.c.), que fuera publicado en el Trámite Parlamentario Nº 183/96 y que se refiere a las propiedades turísticas de tiempo compartido.

Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración y respeto.

Martha C. Alarcía.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

SISTEMAS TURISTICOS DE TIEMPO COMPARTIDO

CAPÍTULO I

Artículo 1º—Ambito de aplicación. La presente ley regula la comercialización, administración e intercambio